

Señores:

**JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA**  
E. S. D.

Medio de Control: **Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Artículo 138 CPACA o Ley 1437 de 2011)**

Demandante: **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE**

Demandados: **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ, y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**

**HAMMER FEIJÓO AGUDELO**, vecino de Cali, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 94'396.488 de Cali, Abogado con T.P. N° 198.001 del C.S.J., en mi calidad de apoderado especial de la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE**, vecina de Guacarí (V.) identificada con Cédula de Ciudadanía N° 29.557.198 de Guacarí (V.), conforme al poder que adjunto, actuando en su nombre y representación, respetuosamente me permito ejercer ante su despacho el Medio de Control de **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, de conformidad con el Artículo 138 del CPACA, contra el **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI**, representado legalmente por el señor Alcalde **GERARDO SALCEDO CALERO** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, representada legalmente a nivel nacional por el señor **MAURICIO OLIVERA** en su calidad de Presidente y en la Regional Occidente por **PIEDAD CECILIA CARDONA PÉREZ**, en su calidad de Gerente, o quienes hagan sus veces al momento de la notificación de la presente demanda, para que mediante el trámite legal correspondiente y a través de sentencia se profieran las condenas que indicaré en la parte petitoria, teniendo en cuenta los siguientes:

### HECHOS

1. La señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** trabajo para el **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ (V.)** durante el periodo comprendido entre el 25 de Febrero de 1994 hasta el 19 de Julio de 2002, en calidad de Trabajadora oficial, ejerciendo funciones de Auxiliar de Servicios Generales siendo despedida de manera unilateral como consecuencia de la supresión del cargo.
2. El **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ** en su condición de empleador de la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** afilió a la trabajadora al sistema de seguridad social integral y fue responsable del pago de las cotizaciones en salud, pensiones y riesgos profesionales durante el periodo de su vinculación laboral.
3. En el año 2000, antes del despido de la señora **DORA MARIA BETANCOURT ARCE** como trabajadora del **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ**, su empleador presento Derecho de Petición dirigido al **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA** solicitando

su valoración y calificación, además del concepto inherente a su rehabilitación laboral.

4. Al momento del despido unilateral de mi poderdante por razón de la supresión del cargo de la planta de cargos del **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ**, ésta padecía enfermedad general relacionada con una Lumbalgia crónica con Discopatía Degenerativa, con hernia pequeña a nivel L4 L5, además de pérdida de la visión de cerca y lejos por causa de una Nictalopia.
5. El **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ** no contaba con autorización del Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social para efectuar el despido de la trabajadora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** teniendo en cuenta su condición de trabajadora enferma, de conformidad con lo ordenado por el Artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
6. Las dolencias de salud que presentaba mi representada al momento del despido, de acuerdo con la historia clínica, se originaron desde 1996 y se prolongaron durante todo el tiempo de su vinculación laboral con el **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ**, dando lugar a 540 días de incapacidad que se cumplieron el 23 de Noviembre de 2001, válidamente concedidas y autorizadas en un alto porcentaje por Medicina Laboral del **ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA**.
7. La señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** a posteriori de su desvinculación del **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ** continuó sufriendo las dolencias de salud que presentó cuando fue despedida por la supresión de su cargo, el 19 de Julio de 2002.
8. Durante el tiempo que la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** fue atendida por los médicos del **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA**, en algunas ocasiones no fueron realizados los exámenes que se ordenaron, es así como a raíz de la pérdida progresiva de la visión fue remitida para su valoración sin que esta se efectuará por no haber sido autorizada, en Noviembre de 2002 el Dr. Humberto Merino Orozco, adscrito a Medicina Laboral del ISS ordeno una Resonancia Magnética que tampoco fue autorizada.
9. El 21 de Marzo de 2006 la señora **DORA MARIA BETANCOURT ARCE** mediante Derecho de Petición solicito a la **ARP del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA** la valoración del grado de invalidez que padecía, el reconocimiento de la indemnización o la Pensión de invalidez desde la fecha en que se estructuro y el pago del retroactivo al que tiene derecho.
10. El Secretario de Recurso Humano del municipio de San Juan Bautista de Guacarí (V.) mediante oficio fechado Septiembre 21 de 2009 afirmo que: *"revisados los archivos de este despacho y del área de tesorería se encontró que la señora **BETANCOURT ARCE** efectivamente presto sus servicios a esta administración municipal (...), también se logró encontrar la respectivas autoliquidaciones mensuales de aportes al sistema general de seguridad social*

*integral. Donde efectivamente aparece el componente de pensión, copia anexa a este documento."*

11. El 21 de Septiembre de 2009 la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** solicito al **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA** área Medicina Laboral, el reconocimiento de la pensión de invalidez, sin que se le hubiera calificado por Junta Regional de Calificación, por no estar afiliada al sistema general de seguridad social en pensiones.
12. El 29 de Septiembre de 2009 el **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI** actualizo la afiliación de mi representada en calidad de trabajadora mediante formulario de vinculación o actualización al sistema general de pensiones del **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA** el cual fue radicado en la sede del municipio de Guadalajara de Buga con la autorización y rubrica del Jefe de Recursos Humanos del municipio. De allí que desde el momento del despido unilateral por la supresión del cargo, es decir desde Julio 19 de 2002 hasta la fecha referida de la nueva actualización de afiliación, mi prohijada no conto con seguridad social en el régimen contributivo, ni mucho menos se siguió pagando cotización alguna por concepto de pensiones a su favor debido a su precaria situación económica.
13. El **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA** omitió someter oportunamente a audiencia de calificación de invalidez a la señora **DORA MARIA BETANCOURT ARCE** pese a haberse acumulado el máximo de semanas de incapacidad temporal establecidos en la normatividad para efectos de su realización, causadas durante el tiempo de su vinculación laboral como consecuencia de sus dolencias de salud, razón por la que la trabajadora solo fue calificada nueve (9) años después de su despido.
14. El médico tratante adscrito a medicina laboral del **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA** decidió no autorizar más prorrogas de incapacidad laboral a favor de la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** debido a no evidenciarse mejoría alguna en la salud de la trabajadora y por haberse acumulado el número máximo de incapacidades autorizadas.
15. El 12 de Febrero de 2010 la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** fue calificada con un 63% de pérdida de capacidad laboral, de conformidad con Dictamen SNML N° 771 de la **VICEPRESIDENCIA DE PENSIONES GERENCIA NACIONAL DE ATENCIÓN AL PENSIONADO DEL ISS**, con fecha de estructuración Junio 9 de 2008, emitido por la médica especializada **LAURA CONSTANZA CORREDOR**, adscrita al Departamento de Atención al Pensionado del ISS, de conformidad con el Capítulo VII, Artículo 52 de la Ley 962 de 2005.
16. En el dictamen mencionado se señala que de acuerdo con la historia clínica completa mi poderdante presenta una "**LUMBALGIA CRÓNICA DE 10 AÑOS DE EVALUACIÓN EN AGOSTO 6 DE 2001**", SE EVICENCIA DISCOPATIA DEGENERATIVA CL EN RNM DE CLS, HERNIA PEQUEÑA A NIVEL L4 L5". También muestra que "EN L5 S1 PROMINENCIA LEVE DEL ANILLO

**FIBROSO DEL DISCO NO SE OBSERVA CANAL ESTRECHO. PACIENTE REFIERE QUE DESDE EL AÑO 2002 NO LABORA POR INCAPACIDAD.**

**"EN JUNIO 9 DE 2008 CONSULTA A OFTALMOLOGIA POR PERDIDA PROGRESIVA DE AGUDEZA VISUAL, EN 2006 SE EXAMENES PARACLINICO HABIA DIAGNOSTICADO MACULOPATIA, SE ORDENA ANGIOGRAFIA LA CUAL NO FUE REALIZADA MARZO 24 DE 2009 PERDIDA DE VISIÓN BILATERAL ANTIGUA Y EMPEORAMIENTO EN OJO IZQUIERDO UVEITIS CRONICA AV. OD 20/400 OI: SIN PERCEPCIÓN DE LUZ . SE DIAGNOSTICA UVEITIS CRONICA SEVERA EN OJO IZQUIERDO. MACULOPATIA, AMBLIOPIA?. SE CONFIRMA MEDIANTE PVE (MARZO 5 DE 2009): ANOMALIA RETINIANA Y/O DE LA VIA VISUAL OJO IZQ."**

17. El 17 de Septiembre de 2010 la señora **DORA MARIA BETANCOURT ARCE** radico Derecho de Petición ante el **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA** solicitando explicación sobre el cuestionamiento del porqué no le han notificado el acto administrativo por medio del cual se le reconozca su derecho a pensión de invalidez, teniendo en cuenta el dictamen N° 771 emitido a su favor, asignándole un 63% de discapacidad laboral.

18. Mediante Resolución N° 13123 de 2010 el Jefe de Atención al Pensionado del **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA** resolvió una solicitud en el Sistema de Seguridad Social en Pensiones Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida. En el artículo primero de la parte resolutive del acto administrativo mencionado se niega la pensión de invalidez a mi representada, de acuerdo a lo conceptuado por parte del médico especializado.

19. En los considerandos de la Resolución N° 13123 de 2010 se sustenta la negativa de la pensión de invalidez de mi prohijada con los siguientes argumentos: "Que para resolver la solicitud elevada por la afiliada, se solicita la historia laboral imputada la cual es expedida por la Gerencia Nacional de Historia Laboral a través del Departamento de Historia Laboral Seccional, donde se encontró que la afiliada, ha cotizado para el Sistema General de Pensiones un total de 320,86 semanas anteriores al momento en que se estructura su invalidez; es decir hasta el 09 de Junio de 2008 de las cuales 0 semanas corresponden a los (3) años anteriores a esta fecha."

"Que aunque la afiliada tampoco cumple con la fidelidad requerida, de acuerdo a la normatividad relacionada en el acápite anterior, que es tener (350) semanas cotizadas al Sistema General de pensiones, el peticionario **NO** cumple con el requisito de las 50 semanas, dentro de los últimos tres (3) años **inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez**, razón por la cual se le niega el derecho a pensionarse por invalidez. Que se le aclara al afiliado, que la Norma aplicable al caso en comento, fue la vigente en el momento que se realizó la estructuración de su estado de invalidez, por cuanto la **Ley 860 empezó a regir a partir del 26 de Diciembre de 2003**"

"Que en su caso no cumple con el número de semanas exigido en la ley, por lo tanto se niega la prestación económica conforme a la norma vigente a la fecha

de estructuración de la invalidez". Concluye afirmando que los presupuestos legales para el reconocimiento de la pensión de invalidez no se han dado.

20. Ante la negativa de reconocimiento de la pensión de invalidez mi representada solicito mediante comunicación manuscrita, radicada en Diciembre 17 de 2010, dirigida al jefe del Archivo Municipal de la Alcaldía de Guacarí las copias de las autoliquidaciones de pagos a su favor de cotizaciones al sistema de Seguridad Social en Pensiones, poniendo de presente que el objetivo es apelar la decisión negativa del **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA**.
21. El Jefe del Archivo Municipal, mediante comunicación fechada Diciembre 20 de 2010 contesto la solicitud anterior suministrando información de los pagos realizados por el Municipio de San Juan Bautista de Guacarí a favor de **DORA MARIA BETANCOURT ARCE** y recordándole a mi representada que el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 " (...) exige a los fondos revisar acciones de cobro contra un empleador moroso (...)", es decir que es obligación del **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA** vigilar y controlar los pagos que por concepto de pensiones deben hacer los empleadores so pena de las acciones ejecutivas que está obligado a adelantar para imponer el incumplimiento a estas obligaciones salvaguardando al trabajador y al sistema.
22. Mediante escrito radicado en Octubre 21 de 2011, dirigido al Jefe de Atención al Pensionado del **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA** por parte de mi representada **DORA MARIA BETANCOURT ARCE**, solicito la Revocatoria de la Resolución 13123 de Diciembre 13 de 2010 y el reconocimiento de la pensión de Invalidez con la retroactividad correspondiente argumentando entre otros aspectos que la estructuración de la invalidez no se produjo el 9 de Junio de 2008, sino a partir del 24 de Noviembre de 2001 y que habiendo estado vinculada laboralmente con el **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI** desde 1994 hasta el 2002, contaba con el número de semanas cotizadas más que suficientes para cumplir con las exigencias de ley para el reconocimiento de su pensión de vejez.
23. Desde el momento en que mi representada la señora **DORA MARIA BETANCOURT ARCE** fue desvinculada del **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI**, es decir desde el 19 de Julio de 2002 hasta el 30 de Enero de 2014, no pudo gozar de su pensión de invalidez, afectándose en sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al mínimo vital y móvil como quiera que no disponía de los recursos económicos necesarios para atender la satisfacción de sus necesidades, dejando de percibir durante este largo periodo las mesadas pensionales a las que tenía derecho.
24. Mediante Resolución GNR 38968 de Febrero 12 de 2014 con número de radicación 2013\_8243657, **COLPENSIONES** revocó el acto administrativo GNR187483 de Julio 18 de 2013, mediante el cual negó la pensión de invalidez, procediendo a reconocer y ordenar el pago de una pensión de invalidez a favor de la demandante, a partir del 1 de Febrero de 2014, en virtud a dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, acto administrativo del cual se corrió traslado a los demandados en el

momento procesal pertinente dentro del trámite de la demanda ordinaria laboral de primera instancia, incorporándose al expediente a folios 345 a 358.

25. Mediante escrito radicado el 11 de Marzo de 2014, mi poderdante **DORA MARIA BETANCOURT ARCE** interpuso Recurso de Reposición contra la Resolución GNR 38968 de Febrero 12 de 2014 con número de radicación 2013\_8243657, por medio de la cual se reconoció el pago de su Pensión de Invalidez, pretendiendo el reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado desde el 19 de Diciembre de 2001, fecha reconocida por la demandada **COLPENSIONES** como de estructuración de la invalidez de mi mandante, hasta el 2 de Febrero de 2014.
26. Mediante Resolución GNR 31503 de Febrero 11 de 2015 con número de radicación 2014\_9346448, se reconoció a la señora **DORA MARIA BETANCOURT ARCE** el retroactivo causado de su pensión de invalidez, sin que se hubiera reconocido los intereses moratorios causados por el no pago oportuno de las mesadas que lo comprenden.
27. Mi prohijada **DORA MARIA BETANCOURT ARCE** mediante demanda ordinaria laboral radicada ante la oficina de reparto judicial de Buga y que correspondió resolver en primera instancia al Juzgado Primero Laboral de Circuito de Buga, reclamo al **MUNICIPIO DE GUACARI** y a **COLPENSIONES** el reconocimiento y pago de su Pensión de Invalidez con su correspondiente retroactivo, intereses e indexación causados desde la fecha en que se estructuro su invalidez, resolviéndose negativamente las pretensiones de la demanda.
28. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buga profirió sentencia negativa a los intereses de la demandante **DORA MARIA BETANCOURT ARCE**, razón por la que el proceso fue remitido a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, autoridad que confirmó la sentencia, remitió el proceso al juzgado de origen y ordeno que este fuese repartido por competencia a la jurisdicción administrativa correspondiente.

### DECLARACIONES Y CONDENAS

**PRIMERA:** Sírvase señor juez, declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado en virtud del Silencio Administrativo Negativo del demandado **MUNICIPIO DE GUACARI** frente al derecho de petición radicado el 12 de Abril de 2013 por la demandante, negando el reconocimiento de su calidad de trabajadora oficial vinculada con el demandado mediante un contrato a término indefinido desde Febrero 25 de 1994 hasta el 19 de Julio de 2002, el reconocimiento de la ineficacia del despido de la trabajadora en virtud a su calidad de enferma al momento de su despido y sin la autorización del Ministerio del Trabajo, el pago de la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

**SEGUNDA:** Sírvase señor juez, declarar la nulidad de la Resolución GNR 31503 de Febrero 11 de 2015 con número de radicación 2014\_9346448 "Por medio de la cual se ordena el reconocimiento de un retroactivo de una pensión de invalidez", proferida por **COLPENSIONES**, a la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE**, en lo referente al NO reconocimiento de los intereses moratorios causados

desde el 19 de Diciembre de 2001, fecha que se reconoció como la de la estructuración de invalidez, hasta el momento en que se hizo efectivo el pago del retroactivo en mención.

**TERCERA:** En consecuencia, sírvase Señor juez condenar al demandado **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI** al restablecimiento del derecho de la demandante, mediante el pago a mi representada **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** de una indemnización equivalente a Ciento Ochenta (180) días de salario por haber despedido unilateralmente y sin justa causa a una trabajadora enferma, sin contar con autorización previa de la Oficina del Trabajo, de conformidad con el Art. 26 de la Ley 361 de 1997.

**CUARTA:** En consecuencia, sírvase señor juez, condenar a los demandados **MUNICIPIO DE GUACARI** y **COLPENSIONES** al restablecimiento del derecho de la demandante, condenándolos solidariamente al pago de los intereses moratorios y/o la indexación correspondiente, causados en relación con las mesadas pensionales no pagadas desde el 19 de Diciembre de 2001 hasta el momento en que se hizo efectivo el pago de dicho retroactivo pensional a la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE**.

**QUINTA:** Sírvase señor juez, condenar a los demandados al **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI** y solidariamente a **COLPENSIONES** a pagar las costas y agencias en derecho del presente proceso de conformidad con el artículo 188 del CPACA (Ley 1437 de 2011).

## **NORMAS VIOLADAS**

### **1. CONSTITUCIONALES**

**ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho**, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, ***fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran*** y en la prevalencia del interés general.

**ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;** facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan ***y en la vida económica***, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica ***y la vigencia de un orden justo***.

***Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.***

**ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas.** En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

***Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.***



**ARTICULO 5o.** *El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.*

**ARTICULO 6o.** Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. *Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.*

**ARTICULO 11.** *El derecho a la vida es inviolable.* No habrá pena de muerte.

**ARTICULO 13.** *Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,* libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

*El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.*

**ARTICULO 46.** *El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.*

*El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.*

**ARTICULO 47.** *El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.*

**ARTICULO 48.** *La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.*

*Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.*

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

*La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.*

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> *El Estado garantizará los derechos,* la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, *respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su*



**cargo.** Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> ***Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.***

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> ***Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones.***

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> ***En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos.***

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> ***Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones.*** No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido.

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> ***Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.*** Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión.

<Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> ***Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento.***

**PARÁGRAFO TRANSITORIO 6o.** <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> ***Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año.***

**ARTICULO 53.** *El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:*

*Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.*

*El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.*

*Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.*

**ARTICULO 209.** *La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.*

*Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.* La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

## **2. LEGALES**

### **LEY 100 DE 1993**

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

**ARTÍCULO 31. CONCEPTO.** *El régimen de Prima Media con Prestación Definida es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes o una indemnización previamente definidas, de acuerdo con lo previsto en el presente título.*

*Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley.*

**ARTÍCULO 24. ACCIONES DE COBRO.** *Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.*



**ARTÍCULO 38. ESTADO DE INVALIDEZ.** Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

**ARTÍCULO 40. MONTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ.** El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a:

a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%.

b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.

La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación.

En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual.

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.

**ARTICULO 23. ACCIONES DE COBRO.** Sin perjuicio de la responsabilidad del empleador de asumir los riesgos profesionales de sus trabajadores, en caso de mora en el pago de las primas o cotizaciones obligatorias corresponde a las entidades administradoras de riesgos profesionales adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador, de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora de riesgos profesionales determine el valor adecuado, prestará mérito ejecutivo.

<Jurisprudencia Concordante ARPC>

#### **Corte Constitucional**

Corte Constitucional, Sentencia T-928-08 de 19 de Septiembre de 2008, M.P.Dr. Rodrigo Escobar Gil. Ficha: F\_ST928\_08

#### **Corte Suprema de Justicia**

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia No. 28790 de 2 de Octubre de 2007, M.P. Dr. Isaura Vargas Díaz. Ficha: F\_CSJ\_RAD\_28790\_07

<Doctrina Concordante ARPC>



Concepto MINPROTECCIÓN SOCIAL 641 de 2004

Concepto SUPERBANCARIA 38789 de 2003

**ARTICULO 34. DERECHO A LAS PRESTACIONES.** <Ver Notas del Editor>  
<Apartes tachados INEXEQUIBLES> *Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, ~~en los términos del presente decreto~~, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas contenidas en este capítulo.*

**ARTICULO 47. CALIFICACION DE INVALIDEZ.** *La calificación de invalidez y su origen, así como el origen de la enfermedad o de la muerte, será determinada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42 y siguientes de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos.*

No obstante lo anterior, en cualquier tiempo, la calificación de la invalidez podrá revisarse a solicitud de la entidad administradora de riesgos profesionales.

**ARTICULO 91. SANCIONES.** <Inciso primero modificado expresamente por el artículo 115 del Decreto extraordinario 2150 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> *Le corresponde a los directores regionales y seccionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social imponer las sanciones establecidas a continuación, frente a las cuales opera el recurso de apelación ante el Director Técnico de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.*

a) *para el empleador*

1. *El incumplimiento de la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales, le acarreará a los empleadores y responsables de la cotización, además de las sanciones previstas por el Código Sustantivo de Trabajo, la legislación laboral vigente y la Ley 100 de 1993, o normas que la modifiquen, incorporen o reglamenten, la obligación de reconocer y pagar al trabajador las prestaciones consagradas en el presente Decreto.*

*La no afiliación y el no pago de dos o más periodos mensuales de cotizaciones, le acarreará al empleador multas sucesivas mensuales de hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

3. Cuando la inscripción del trabajador no corresponda a su base de cotización real, o el empleador no haya informado sus cambios posteriores dando lugar a que se disminuyan las prestaciones económicas del trabajador, el empleador deberá pagar al trabajador la diferencia en el valor de la prestación que le hubiera correspondido, sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar.

5. *La no prestación o extemporaneidad del informe del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional o el incumplimiento por parte del empleador de las demás obligaciones establecidas en este decreto, la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrá imponer multas de hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.*

**c) Para la entidad administradora de riesgos profesionales**

**Las entidades administradoras de riesgos profesionales que incurran en conductas tendientes a dilatar injustificadamente el pago de las prestaciones de que trata el presente decreto, o impidan o dilaten la libre escogencia de entidad administradora, o rechacen a un afiliado, o no acaten las instrucciones u ordenes de la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, serán sancionadas por la Superintendencia Bancaria en el primer caso, o por la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales, en los demás, con multas sucesivas hasta de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las demás previstas en la ley o en este decreto.**

**ARTICULO 95. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de agosto de 1994, en caso de mora en el pago de la mesadas pensionales de que trata este decreto, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés para créditos de libre asignación, certificado por la Superintendencia Bancaria, para el período correspondiente al momento en que se efectúa el pago.**

**LEY 361 DE 1997**

Por la cual se establecen Mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones

**Artículo 26°.-**

En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, **ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.**

No obstante, **quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.**

**ARTÍCULO 9o. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación.**

En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la capacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el artículo 6o. de la presente ley, dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere concluido el proceso de rehabilitación integral, de existir discrepancias se acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez, quedando a cargo de la entidad de Seguridad Social correspondiente el pago de honorarios y demás gastos que se ocasionen.

El costo del dictamen será a cargo de la Administradora de Riesgos Profesionales, pero el empleador o el trabajador podrán acudir directamente ante dichas juntas.

**ARTÍCULO 10. MONTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ.** Todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el caso:

- a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación;
- b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso base de liquidación;
- c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%).

**PARÁGRAFO 1o.** Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán continuar cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud, con sujeción a las disposiciones legales pertinentes.

**PARÁGRAFO 2o.** No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados en el mismo evento.

El trabajador o quien infrinja lo aquí previsto será investigado y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado y obtenido indebidamente.

**ARTÍCULO 13. MONTO DE LAS PENSIONES.** Ninguna pensión de las contempladas en esta ley podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a veinte (20) veces este mismo salario.

**ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES.** Las pensiones de invalidez y de sustitución o sobrevivientes del Sistema General de Riesgos Profesionales se reajustarán anualmente, de oficio el primero (1o.) de enero de cada año, en el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor total nacional, certificado por el Dane para el año inmediatamente anterior.

No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno Nacional, cuando dicho reajuste resulte superior al de la variación del IPC, previsto en el inciso anterior.

## CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

### 1. DESPIDO INEFICAZ DE SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y TRANSGRESIÓN DEL ARTÍCULO 13 DE LA CARTA POLÍTICA

Antes de adentrarnos en los aspectos relacionados con el derecho pensional de mi representada **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE**, resulta de gran importancia relieves que el demandado **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI** la despidió de manera unilateral y sin justa causa el 19 de Julio de



2002, argumentando la supresión del cargo, sin permiso del Ministerio del Trabajo, cuando ésta se encontraba en estado de enfermedad, como bien se puede establecer a partir de la revisión de la historia clínica de la trabajadora, quien precisamente antes de ser despedida fue beneficiaria de su último periodo de incapacidad laboral al haber completado 540 días de incapacidad el 23 de Noviembre de 2001.

Lo anterior riñe con la prescripción legal contenida en el Artículo 26 de la Ley 361 de 1997, vigente para la época del despido, que establece que el trabajador que se encuentre enfermo o con alguna discapacidad se considera un sujeto de especial protección constitucional, goza de estabilidad laboral reforzada, solo puede ser despedido cuando medie autorización del Ministerio del Trabajo y bajo determinadas circunstancias o condicionamientos, lo que se omitió por parte del ente territorial demandado, haciéndose acreedor al pago a favor del trabajador de la sanción equivalente a Ciento Ochenta (180) Salarios Diarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

Todo lo anterior en virtud a su condición de sujeto de especial protección constitucional, que amerita una atención y protección especial del Estado al encontrarse en estado de debilidad manifiesta por las graves enfermedades que padecía para el momento en que se efectuó su despido unilateral, lo que en atención del artículo 13 de la Constitución Política es violatorio de su derecho a la igualdad, está proscrito del Estado Social de Derecho y es sancionado en nuestro ordenamiento jurídico, transgrediendo de contera otros derechos fundamentales como la dignidad humana, la seguridad social en pensiones, la salud, la vida y el mínimo vital y móvil.

## **2. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS**

El derecho a la Seguridad Social en Salud y Pensiones se encuentra plasmado en el artículo 48 del texto constitucional. Es así como pese a no estar incorporado en el capítulo correspondiente a los derechos fundamentales, adquiere tal categoría por su directa relación con las posibilidades efectivas de goce de otros derechos fundamentales. La Corte Constitucional ha interpretado que no es necesario que un derecho para ser considerado como fundamental tenga que estar expresamente enunciado como tal en la Carta Política. Entre otras razones, al menos en el caso particular del derecho a la Seguridad Social, en virtud a tratados internacionales que ha suscrito y ratificado el Estado Colombiano, que protegen derechos Económicos y Sociales<sup>1</sup> categorizados como derechos humanos, dando lugar al denominado bloque de constitucionalidad de conformidad con el artículo

---

<sup>1</sup> Arango, Rodolfo. El concepto de derechos sociales fundamentales. Legis Editores, Bogotá., 2005; Alexy, Robert. La Teoría de los Derechos Fundamentales. Editorial Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, Madrid, 1993.

93 de la carta magna<sup>2</sup>. Lo que realmente resulta importante para ser considerado como tal es la identidad con los principios y valores del Estado Social de Derecho<sup>3</sup>

El derecho fundamental a la Seguridad Social en Pensión de Invalidez adquiere tal talante cuando su no reconocimiento genera la vulneración de otros derechos fundamentales tales como el derecho a la vida en condiciones de dignidad, el derecho al Mínimo Vital y Móvil, El derecho a la Salud y el derecho al Trabajo<sup>4</sup>. Más aun cuando este es invocado en relación con una persona en condición de discapacidad o que ha sufrido la disminución de su capacidad laboral por motivos ajenos a su voluntad, en consecuencia en estado de debilidad manifiesta, adquiriendo la calidad de sujeto de especial protección constitucional.

Como bien se puede apreciar, lo trascendente es la relación entre el derecho pensional y las condiciones materiales de subsistencia del demandante, además de su estado de discapacidad laboral. Es así como frente a este tipo de situaciones el Estado está en la obligación constitucional de propiciar condiciones de igualdad respecto de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, además de brindar una especial protección a los discapacitados.

El derecho a la seguridad social en pensiones, al derivar de manera directa e inmediata del derecho fundamental al trabajo, que a su vez es principio del Estado Social de derecho, comparte tal naturaleza.

Por otra parte, la Constitución Política define a la Seguridad Social como un derecho irrenunciable y un servicio público obligatorio que debe ser dirigido, coordinado y controlado por el Estado, que tiene la carga de asegurarla conforme a principios de solidaridad, universalidad y eficiencia

### 3. RESPONSABILIDAD RESPECTO DE LAS COTIZACIONES A PENSIÓN

Con relación al derecho pensional de mi prohiada **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** hay que decir que dentro de las contingencias que está previsto sean cubiertas por el ISS encontramos a la Pensión de Invalidez de origen común y la de origen profesional o por accidente de trabajo. Lo anterior se encuentra reglado por la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003.

### NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO EN CONCRETO

En el contexto anterior, para la época del inicio de la vinculación con el **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ** se encontraba vigente la Ley 100 de 1993 que en su artículo 24 hace referencia a las acciones de cobro por

<sup>2</sup> Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", aprobado mediante Ley 319 de 1996 que prescribe en su artículo 9: "toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes". El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado mediante Ley 74 de 1968, reconoce "el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social."

<sup>3</sup> Sentencia T 391 de 2011, Referencia expediente T-1093186, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

<sup>4</sup> Sentencia T 595 de 2007, Referencia: expediente T-1613865, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

no consignación de cotizaciones por parte de los empleadores, en cabeza del ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA.

La Ley 361 de 1997 en su artículo 26, modificado por el artículo 37 del Decreto Nacional 019 de 2012, estaba vigente para la época del despido de mi representada por parte del MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ.

Todo el anterior marco legal para resolver el problema jurídico en el contexto del principio de favorabilidad y de progresividad que frente a estos temas ha desarrollado la Corte Constitucional.

### PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES

1. A continuación relaciono un extracto de la Sentencia T-032-12 de la Corte Constitucional cuyo ponente fu el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub:

#### ***“EL CONTENIDO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y LA IMPORTANCIA DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ”***

*“El artículo 48 de la Constitución Política define la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, y como una garantía irrenunciable de todas las personas.”*

*“Una de las garantías de la seguridad social son las pensiones por vejez o por invalidez. La pensión de invalidez tiene por finalidad proteger a la persona que ha sufrido una disminución considerable en su capacidad laboral, puesto que, dicha condición física o mental, impacta negativamente su calidad de vida y la eficacia de otros derechos fundamentales.<sup>5</sup> Del mismo modo, busca proteger el mínimo vital de la persona y su núcleo familiar, cuando éste depende de los ingresos económicos del afiliado.”*

*“Con fundamento en estas consideraciones, esta Corporación, en sentencias como la T-658 de 2008<sup>6</sup>, ha señalado el carácter fundamental que tiene el derecho a la seguridad social en pensiones, especialmente respecto de la pensión de invalidez por su relación con la garantía de la dignidad humana; dijo al respecto la Corte:*

*“El derecho a la seguridad social, en la medida en que es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana, es un verdadero derecho fundamental cuyo desarrollo, si bien ha sido confiado a entidades específicas que participan en el sistema general de seguridad social fundado por la Ley 100 de 1993, encuentra una configuración normativa preestablecida en el texto constitucional (artículo 49 superior) y en los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad; cuerpos normativos que dan cuenta de una categoría iusfundamental íntimamente arraigada al principio de dignidad humana, razón por la cual su especificación en el nivel legislativo se encuentra sometida a contenidos sustanciales preestablecidos.”*

<sup>5</sup> Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos” OEA/Ser. L/V/II.129 Doc. 4, 7 de septiembre de 2007.

<sup>6</sup> MP. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

*"De esta manera, siguiendo el lineamiento constitucional esbozado en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política que establece que todos los derechos constitucionales deben ser interpretados a la luz de los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, es de vital importancia establecer el contenido del derecho a la seguridad social a la luz de las preceptivas internacionales."*

*"Al respecto, esta misma sentencia en estudio señaló:*

*"Sobre el particular, de manera reciente<sup>7</sup> el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) -órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto- emitió la observación general número 19, sobre "El derecho a la seguridad social (artículo 9)". De manera puntual, el Comité destacó la enorme importancia que ostenta dicha garantía en el contexto de plena satisfacción de los derechos humanos<sup>8</sup>, en la medida en que el derecho a la seguridad social adquiere el estatuto de condición ineludible de tal posibilidad de goce dentro de los esfuerzos que han de llevar a cabo los Estados para superar las condiciones materiales de pobreza y miseria que se oponen al disfrute de las libertades individuales."*

*(...)*

*De manera precisa, en cuanto al contenido del derecho bajo examen, el Comité señaló lo siguiente: "El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar, b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo."<sup>9</sup> (Subraya fuera de texto)*

*"De lo anterior se puede concluir que la garantía a la seguridad social y su fundamentalidad está muy ligada a la satisfacción real de los derechos humanos, especialmente el de la dignidad humana, pues a través de este derecho puede afrontarse la lucha contra los índices de pobreza y miseria."*

*"De manera especial, con la protección de esta garantía en las hipótesis de invalidez se busca evitar los efectos negativos que emanan de la falta de recursos económicos para cubrir aspectos básicos como la salud y el sostenimiento del hogar, máxime si al interior del mismo se encuentran hijos menores de 18 años, debido a la imposibilidad del trabajador de seguir desempeñándose en el mercado laboral."*

**"LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL REFORZADA DE LOS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O CON ALGUNA ENFERMEDAD GRAVE"**

*"Nuestro ordenamiento constitucional ha introducido normas mediante las cuales dispone un tratamiento preferencial para las personas que se encuentran en una*

<sup>7</sup> 39° período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales"

<sup>8</sup> De manera textual el Comité señaló lo siguiente: 'El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto'

<sup>9</sup> Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-658 del 1 de julio de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

*situación mayor de vulnerabilidad, como manifestación del principio de igualdad material, una de las principales innovaciones del modelo de Estado Social de Derecho, a saber:*

El artículo 13, en los incisos 2 y 3, señala:

*“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados... El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”*

Siguiendo los mismos lineamientos, el artículo 47 de la Carta establece que:

*“... el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.*

Del mismo modo, el artículo 54 superior consagra de manera expresa el deber del Estado de *“...garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud...”*.

Con fundamento en los artículos 13, 47 y 54, la Corte señaló en la sentencia T-884 de 2006<sup>10</sup> que la Constitución impone al Estado los siguientes deberes frente a las personas con discapacidad:

*“... impone a las autoridades públicas (i) la obligación de abstenerse de establecer diferenciaciones fundadas en discapacidades físicas, mentales o sensoriales; y (ii), el deber de adoptar medidas de discriminación positiva en favor de las personas con discapacidad para que puedan disfrutar, en igualdad de condiciones, de sus derechos y libertades, lo que implica su plena inclusión social como manifestación de la igualdad real y efectiva; (iii) dentro de dichas medidas, la Constitución contempla aquellas relativas al ámbito laboral acorde con las condiciones de salud de esta población y “la formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran”, así como la educación para las personas con limitaciones físicas o mentales”.*

*“Igualmente, esta Corporación, en sentencias como las T-826<sup>11</sup> y T-974<sup>12</sup> de 2010, ha señalado la importancia de proteger a las personas que se encuentran en circunstancias de indefensión debido a su situación de discapacidad y a su imposibilidad de desarrollarse en el campo laboral, lo que afecta directamente su mínimo vital y el de su núcleo familiar.”*

*“También ha indicado, en sentencias como la T-093 de 2007<sup>13</sup>, “... que la omisión de proporcionar especial amparo a las personas colocadas en situación de indefensión bien sea por razones económicas, físicas o mentales puede incluso equipararse a una medida discriminatoria...”<sup>14</sup>. Lo anterior, por cuanto la situación que enfrentan estas personas les impide integrarse de manera espontánea a la sociedad para poder ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones, así*

<sup>10</sup> MP, Dr. Humberto Sierra Porto.

<sup>11</sup> MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

<sup>12</sup> MP, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

<sup>13</sup> MP, Dr. Humberto Sierra Porto

<sup>14</sup> Ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencia T-378 de 1997.

que el Estado no puede negarse a adoptar un conjunto de medidas de orden positivo orientadas a superar en la medida de lo factible esa situación de desigualdad y de desprotección a la que ellas se ven avocadas."

"Teniendo en cuenta lo anterior, el Estado debe brindar las condiciones normativas y materiales que permitan a las personas colocadas en situaciones de debilidad manifiesta, en la medida de lo posible, superar su situación de desigualdad. Este deber de protección no sólo radica en cabeza de las y los legisladores, sino también le corresponde ejercerlo a las y los jueces, quienes han de adoptar medidas de amparo específicas según las circunstancias de cada caso en concreto<sup>15</sup>."

"Ahora bien, la discapacidad como un factor de indefensión que justifica la adopción de medidas de diferenciación positiva, es definida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 5<sup>16</sup>, como:

"...Con la palabra "discapacidad" se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones... La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio..."

De conformidad con el enfoque seguido en las Normas Uniformes, en la presente Observación general se utiliza la expresión "persona con discapacidad" en vez de la antigua expresión, que era "persona discapacitada". Se ha sugerido que esta última expresión podía interpretarse erróneamente en el sentido de que se había perdido la capacidad personal de funcionar como persona. (Subraya fuera de texto)..."

"La discapacidad comprende la invalidez; en efecto, en la sentencia T-198 de 2006<sup>17</sup>, esta Corporación especificó que los conceptos de discapacidad e invalidez son disímiles, siendo el último una especie dentro del género de las discapacidades. Puntualmente se dijo:

"se encuentra establecido que se presenta una clara diferencia entre los conceptos de discapacidad e invalidez. En efecto, podría afirmarse que la discapacidad es el género, mientras que la invalidez es la especie, y en consecuencia no siempre que existe discapacidad necesariamente nos encontramos frente a una persona invalida. La invalidez sería el producto de una discapacidad severa."

"Así lo ha entendido el legislador al redactar el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, en el que resaltó que solamente la pérdida de capacidad severa, es decir, la que supera el 50%, es considerada invalidez. (subrayado fuera de texto original) Al respecto señaló:

<sup>15</sup> Sentencia T-841 de 2006.

<sup>16</sup> La Corte Constitucional colombiana ha reconocido que las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), intérprete autorizado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ayudan a definir el contenido y alcance de los derechos económicos sociales y culturales. Sobre este tema pueden verse, entre otras, las sentencias T-200 de 2007 y T-1248 de 2008.

<sup>17</sup> MP. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra



*“ARTÍCULO 38. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.”*

*“En resumen, la Constitución Política, la Corte Constitucional y los organismos internacionales han sido reiterativos en la obligación del Estado de proteger a aquellas personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, como es el caso de las personas con discapacidad; así mismo, han señalado la importancia de resguardar su derecho fundamental a la seguridad social y acoger medidas de orden positivo orientadas a que puedan superar la situación de desigualdad y de desprotección a la que se ven sometidas.”* (Subrayado fuera de texto original).

## FUNDAMENTOS JURÍDICO PROCESALES

Artículos 10, 40, 138, 155 núm. 2, 156 núm. 3, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164 núm.1 literal c), 166, 188,192, 193 y 195 y demás normas concordantes del CPACA (Ley 1437 de 2011).

## ACTOS ACUSADOS OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL

1. El acto administrativo Ficto o Presunto configurado por la omisión del **MUNICIPIO DE GUACARI** al no contestar el derecho de petición radicado el 12 de Abril de 2013, presumiéndose el silencio administrativo negativo de la administración.
2. La Resolución GNR 31503 de Febrero 11 de 2015, proferida por **COLPENSIONES**, por medio de la cual se ordena el reconocimiento de un retroactivo de pensión de invalidez a la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE**.

## REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

### 1. AGOTAMIENTO DE VÍA GUBERNATIVA

Para el cumplimiento de los requisitos previos para demandar a fin de ejercer el medio de control de nulidad y Restablecimiento del Derecho respecto del acto ficto o presunto de la administración del **MUNICIPIO DE GUACARI** que configura la presunción de Silencio Administrativo Negativo frente al derecho de petición radicado el 12 de Abril de 2013, no era necesario interponer el recurso de reposición y no procede el recurso de apelación por tratarse de una entidad territorial en la que no existe un superior jerárquico del señor Alcalde Municipal, entendiéndose agotada la vía gubernativa y permitiéndose acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa de manera directa. Se anexa como prueba procesal el derecho de petición mencionado.

En cuanto a la Resolución GNR 31503 de Febrero 11 de 2015, proferida por **COLPENSIONES**, por medio de la cual se ordena el reconocimiento de un retroactivo de pensión de invalidez a la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE**, al habersele negado los intereses moratorios y/o la indexación correspondiente, conceptos inherentes a una prestación periódica, la demanda puede ser impetrada en cualquier momento, sin que resulte necesario que se hayan agotado los recursos de Reposición y Apelación.

## CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Instauro la presente acción de conformidad con el artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA, la presente demanda puede presentarse en cualquier tiempo por estar dirigida al reconocimiento de prestaciones periódicas, sin que operé la caducidad de la acción o la prescripción del derecho.

## COMPETENCIA

Por la naturaleza del acto impugnado, el domicilio de las partes demandadas, la calidad de las partes, el último lugar de prestación de servicios y la cuantía que no supera los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales, conforme a los artículos 155, 156 y 157 del CPACA (Ley 1437 de 2011), es usted competente Señor Juez Administrativo para conocer de la presente demanda.

## ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTIA

La estimo en **VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20'000.000) Moneda Legal Colombiana**, suma a la que aproximadamente ascienden los intereses moratorios adeudados.

## PRUEBAS

### Documentales

1. Copia simple de cédula de ciudadanía de la señora **DORA MARÍA BETANCOURTH ARCE**.
2. Copia simple de certificación de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACARÍ** fechada Marzo 13 de 2010, en la que se informa que la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** trabajó para la administración municipal de Guacarí como Auxiliar de Servicios Generales, desde Febrero 25 de 1994 hasta Julio 19 de 2002 y que este empleador el "patrono de afiliación a salud y pensión al Instituto de Seguro Social".
3. Original de Resolución N° 13123 de 2010 "por medio de la cual se resuelve una solicitud en el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, Régimen Solidario de Prima Media con prestación definida" negando solicitud de reconocimiento de Pensión de Invalidez a la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE**.
4. Copia simple de Derecho de Petición de la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** dirigido al Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del ISS Seccional Valle, radicado en Octubre 21 de 2011, solicitando revocatoria de la Resolución N° 13123 de Diciembre 13 de 2010.
5. Copia simple de Resolución N° 005151 de Mayo 28 de 2012 expedida por el Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- ISS SECCIONAL VALLE DEL CAUCA**, por medio de la cual se confirma la Resolución N° 13123 de Diciembre 13 de 2010, mediante la cual se niega la Pensión de Invalidez a la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE**.
6. Copia simple de Derecho de Petición radicado el 21 de Marzo de 2006, dirigido por **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** a la ARP del Seguro Social solicitando valoración y calificación del grado de invalidez, reconocimiento de

indemnización o pensión de invalidez desde el momento de la estructuración y pago del retroactivo a que tenga derecho.

7. Original de oficio fechado Septiembre 17 de 2010, con sello de recibido de igual fecha, dirigido a la Vicepresidencia de Pensiones del ISS por la señora **DORA MARÍA BETANCOURT ARCE** mediante el cual solicita se le haga entrega de la resolución del ISS por medio de la cual se le reconoce el derecho a Pensión de Invalidez.
8. Copia simple de Resolución GNR 187483 de Julio 18 de 2013, expedida por **COLPENSIONES**, por medio de la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa interpuesta contra la Resolución N°13123 de Diciembre 13 de 2010.
9. Copia simple de notificación de resolución N°13123 de Diciembre 13 de 2010 que resuelve una solicitud de prestaciones económicas a **DORA MARIA BETANCOURT ARCE**.
10. Oficio radicado el 12 de Abril de 2013 en la Alcaldía de San Juan Bautista de Guacarí por medio del cual se agotó la reclamación administrativa.
11. Copia simple de Resolución GNR 38968 de Febrero 12 de 2014, expedida por **COLPENSIONES** por medio de la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas a la señora **DORA MARIA BETANCOURT ARCE**.
12. Copia simple de notificación de Resolución GNR 38968 de Febrero 12 de 2014 que resuelve una solicitud de prestaciones económicas a **DORA MARIA BETANCOURT ARCE**.
13. Copia simple de Recurso de Reposición interpuesto por **DORA MARIA BETANCOURT ARCE** contra la Resolución GNR 38968 de Febrero 12 de 2014.
14. Copia simple de notificación de Resolución GNR 31503 de Febrero 11 de 2015 que reconoce un retroactivo de una pensión de invalidez a **DORA MARIA BETANCOURT ARCE**.
15. Copia simple de notificación de Resolución GNR 31503 de Febrero 11 de 2015 que reconoce un retroactivo de una pensión de invalidez a **DORA MARIA BETANCOURT ARCE**.

## DE OFICIO

Las demás pruebas que el honorable juez a su bien tenga practicar, que considere procedentes, útiles, conducentes y pertinentes para la verificación de los hechos y un mejor proveer.

## ANEXOS

Adjunto a la presente demanda los siguientes documentos:

1. Poder legalmente conferido por la demandante.
2. Los documentos anunciados como pruebas documentales.
3. Copias de la demanda con los anexos pertinentes, para el archivo del juzgado (1 sin anexos), el traslado para el demandado **MUNICIPIO DE GUACARI** (2 con anexos), el traslado para el demandado **COLPENSIONES** (2 con anexos), el traslado para el Ministerio Público (2 con anexos), el traslado para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (2 con anexos y medio magnético).

## NOTIFICACIONES

- Mi poderdante **DORA MARIA BETANCOURT ARCE**, en la Calle 7 N° 9-100, barrio El Limonar de la ciudad de San Juan Bautista de Guacarí (V.).
- El suscrito apoderado en la Carrera 35 N° 12-49, barrio Olimpico de la ciudad de Cali (V.) o en el correo electrónico hamfe173@gmail.com, en el que de antemano acepto ser notificado.
- Los demandados: **COLPENSIONES** en Calle 24 Norte N° 6AN-42 de la ciudad de Cali (V.) y el **MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARÍ** en la Calle 4 N° 8-16, barrio Central de la ciudad de Guacarí (V.).

Agradeciendo la atención prestada, me suscribo respetuosamente,



**HAMMER FEIJÓO AGUDELO**

C.C. N° 94.396.488 de Cali

T.P. N° 198.001 del C.S.J.